# Notas para el debate al interior del campo popular

Sandra Carolina Bautista
Economista. Magíster en Estudios Políticos. Docente Universitaria
Integrante de la Junta Patriótica Nacional Marcha Patriótica

Resulta evidente que el momento de la Historia al que asistimos, y del que el campo popular resulta protagonista, se presenta pletórico en acontecimientos políticos y sociales, mostrando que un nuevo momento de ampliación de las resistencias ha asomado en nuestro país. Todavía no se ha logrado revertir el proceso de derechización y fascistización, padecido desde los albores del siglo XXI, el cual, amparado en lógicas perversas, ha pretendido desvirtuar la posibilidad de construir propuestas de cambio fincadas en un profundo arraigo popular. Sin embargo, se han expresado con fuerza diferente fenómenos de lucha social que generan la posibilidad y la necesidad de abrir nuevos debates entre las diferentes expresiones del campo popular y democrático, siempre en la perspectiva de construir y avanzar en nuevos sueños posibles.

Se presentan a continuación algunas reflexiones en torno a algunos puntos para la comprensión del momento actual en el campo social y popular, así como el análisis de los retos y perspectivas para la izquierda en nuestro país. Específicamente se trabajan tres aspectos, en primer lugar algunos aportes sobre la relación entre lo social y lo político en los procesos sociales y populares; segundo, una reflexión sobre el momento actual de la lucha popular, con una mención de algunos de los principales retos que trae para la izquierda el ascenso de la lucha social, y por último una presentación alrededor de la trascendencia de la solución política al conflicto social, político, económico y armado del país, como proceso de construcción de formas reales de democracia.

## 1. Nuevamente a los debates sobre la relación entre lo social y lo político

Desde la perspectiva ideológica, la reproducción de un régimen de acumulación como el actual, sustentado en la continua mercantilización de los derechos sociales y de todas las esferas de la vida humana y natural, la reconfiguración del papel del Estado –que se substrae de la producción y provisión directa de bienes y servicios-, la reprimarización de la economía, así como la entronización de los mercados externos, el capital trasnacional y financiero como vías esenciales para el crecimiento económico, requiere de una visión de mundo coherente, centrada en el culto extremo del individualismo, el descreimiento de todo lo colectivo y la adopción del dogma relativo a que el conjunto de la vida personal y social se reduce a lógica empresarial del "máximo beneficio con el menor costo".

Derivado de lo anterior, la implementación del neoliberalismo ha traído como consecuencia en el terreno ideológico la separación de los campos social y político, tanto conceptualmente como en la práctica política real. Como bien lo presenta el profesor Sergio De Zubiría[1], la concepción de la política ha sufrido un proceso de debilitamiento en tanto que articulador y organizador de campos como lo público, lo colectivo y lo social, que se ha traducido en desideologización, preeminencia de los intereses individuales, de caudillos o clanes familiar-empresariales, presentación del mensaje político como mensaje comercial a ser consumido en pocos segundos y la determinación que el ejercicio político es sólo aquel que se hace desde la lógica institucional y estatal.

Igualmente, desde teorías cercanas a corrientes posmodernas se busca separar y restringir los campos social y político, a la manera de compartimentos estancos. A modo de ilustración puede citarse el concepto de *sociedad civil*,

https://colarebo.files.wordpress.com/

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/imagen-340748-plaza-de-bolivar-llena

http://www.facebook.com/pages/Marcha-Patri%C3%B3tica

1 De Zubiría Sergio. Carácter, Alcances y Plataforma Política. Marcha Patriótica (borrador) Mímeo. 2012

cuyo resurgimiento ha sido reflexionado ampliamente por Jean Cohen y Andrew Arato[2]. Estos autores afirman que una de las definiciones más trascedentes para las organizaciones de la sociedad civil es la de "autolimitación", según la cual, el campo de lo civil se encuentra plenamente diferenciado de las llamadas "sociedad política" y "sociedad económica", y si bien la sociedad civil puede influir en las otras dos, no puede pretender ir más allá de su campo propio, que sería el de la reivindicación específica y particular, a riesgo de caer en proyectos "fundamentalistas", que conducen a la pérdida de la "conducción societal" y la pluralidad social que caracteriza a la sociedad civil. Como consecuencia de la autolimitación, la sociedad civil está llamada a diferenciarse permanentemente de la política, a su vez, restringida a quienes se encuentran en el gobierno y controlan las instituciones estatales. Asistimos también por esta vía a la despolitización de lo social y al confinamiento de la política a lo institucional formal.

La práctica política tradicional en el país ha apelado también al distanciamiento de lo político -reducido a lo electoral- de lo social -visto únicamente al amparo de la conformación de organizaciones gremiales-, en una perspectiva que se aplica particularmente a los procesos de los sectores subalternos. Así, por ejemplo, la manipulación del ordenamiento electoral por parte del bloque hegemónico en el poder no permite a las organizaciones políticas tener personería jurídica si no se está en el marco permanente del juego electoral. De acuerdo con el artículo 108 de la Constitución, la personería jurídica depende de que la organización política mantenga una votación no inferior al 2% de los votos válidos a nivel nacional para las elecciones de Cámara o Senado inmediatamente anteriores.

Incluso en países como Chile, en el que persisten instituciones y lógicas políticas heredadas de la dictadura de Pinochet, las condiciones para el reconocimiento formal de los partidos dan mayores posibilidades para la participación política. Así, es factible formar una organización política mediante la firma de escritura pública, la afiliación de por lo menos el 0,5% del electorado participante en la última elección de diputados y por la presencia en no menos de 8 de las 12 regiones que componen el país[3].

---

2 Cohen Jean y Arato Andrew "Sociedad Civil y Teoría Política" Fondo de Cultura Económica, 2001

3 García Juan Ignacio. "Regulación Jurídica de los Partidos Políticos en Chile". En: Regulación jurídica de los partidos políticos en América Latina" Zovatto G., Daniel (Coordinador). México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2006 pdba. georgetown.edu/Parties/Chile/Leyes/regulacionjuridica.pdf

Este contraste simple demuestra como la legislación colombiana -que se precia de ser democrática- ha sido construida para que pocas organizaciones sean reconocidas formalmente como políticas, mediando la definición únicamente por el elemento electoral y desconociendo que existen múltiples formas de participación política que son ejercidas por las y los colombianos, y sus organizaciones. A su vez, el complejo panorama de reformas electorales de la última década ha conducido a las organizaciones políticas de izquierda más importantes al afán permanente de cumplir con los requerimientos electorales, priorizando este ejercicio en el marco de un repertorio de acciones que sirven para construir la política y promover la participación social y popular.

La situación es más compleja en tanto los sectores dominantes han cerrado el paso para la participación electoral de los movimientos sociales y ciudadanos, utilizando como recurso preferente la violencia, mediante, por lo menos, dos vías. Por un lado, se encuentra la diversidad de mecanismos de presión, fraude y manipulación, utilizados para lograr el triunfo de listas uribistas en las elecciones de Senado y Cámara de 2006 y la del propio Uribe. Tal y como ha sido investigado y denunciado en medios académicos y periodísticos, escenarios como el conocido "Pacto de Chivolo", firmado en el año 2000, fueron la ratificación y formalización de los acuerdos entre políticos y estructuras paramilitares a nivel regional con el fin de impulsar candidatos y listas particulares, acudiendo a la amenaza, el amedrentamiento y la muerte para lograr las curules regionales y nacionales. Otros pactos de similar calibre fueron el de Pivijay, firmado el 20 de septiembre de 2001 y el del Magdalena firmado en 2002. Y como recientemente ha ocurrido, el propio jefe paramilitar Mancuso, reafirmó el apoyo económico y político dado a la reelección de Álvaro Uribe en el año 2006.

La segunda forma de uso de la violencia como recurso para excluirá los sectores del campo democrático y popular,

No puede entenderse que al surgir nuevos procesos organizativos se está configurando un antagonismo con los previamente existentes. Todo lo que sume y multiplique en el desarrollo de la lucha social debe ser congratulado y no señalado bajo falsos debates o utilizado como excusa para evadir los debates internos de cada organización.

complementaría a la anterior, ha sido el continuo exterminio de procesos y líderes de oposición, el desplazamiento, el exilio, la persecución y el encarcelamiento para quién diciente de las políticas de Estado.

La realidad de América Latina y Colombia plantea serios desafíos a las propuestas teóricas y prácticas políticas que intentan restringir lo político a lo institucional estatal y a la lógica electoral, y propone la necesidad de plantear conceptualizaciones diferentes de los campos de la política y lo social. En términos analíticos, vale la pena recordar lo planteado por Atilio Borón a propósito de los debates sobre el poder y la centralidad o no del mismo. Para este autor, el problema de la relación entre lo social y lo político puede abordarse desde el concepto y la práctica del "poder social", según la cual

> *"el poder no es una cosa, o un instrumento que puede empuñarse con la mano derecha o con la izquierda, sino una construcción social que, en ciertas ocasiones, se cristaliza en lo que Gramsci llamaba "las superestructuras complejas" de la sociedad capitalista. Una de tales cristalizaciones institucionales es el Estado y su gobierno, pero la cristalización remite, como la punta de un iceberg, a una construcción subyacente que la sostiene y le otorga un sentido. Es ésta quien, en una coyuntura determinada, establece una nueva correlación de fuerzas que luego se expresa en el plano del Estado"* [4].

Bajo esta concepción, el poder se construye desde los procesos organizativos de base, convergiendo para expresarse en las instituciones de gobierno y Estado; el poder no existe sólo en la formalidad institucional; no es un instrumente ubicado en un único lugar, sino que se edifica desde lo social. En ese sentido, la política no se restringe a lo institucional estatal y lo social es fuente y ejercicio de poder y, por tanto, de lo político, a la vez que la acción política presentan múltiples formas, entre las cuales lo electoral sería una de ellas.

Esta propuesta, largamente discutida en la izquierda, parece haber sido olvidada por los procesos de convergencia de la última década. En el marco del desarrollo táctico de las organizaciones democráticas y revolucionaras, juega un papel fundamental la ponderación balanceada de los repertorios de acción y movilización a utilizar en cada momento, sabiendo también que, dentro de estos repertorios, existen formas que son priorizados según las concepciones de política que subyacen a las prácticas de

4 Borón, Atilio "Poder, "contra-poder" y "antipoder." Notas sobre un extravío teórico político en el pensamiento crítico contemporáneo". En: *Chiapas*, Buenos Aires/México, Nº 15, Agosto de 2003, p. 10.

cada organización. De esta manera, el Movimiento Político y Social Marcha Patriótica, acorde con la concepción de poder social, apela en lo esencial a la organización y lucha de base como forma privilegiada, ya que es de allí que habrá de brotar una nueva forma de poder.

La experiencia de las comunidades y sectores movilizados a lo largo de las últimas dos décadas ha evidenciado que la lucha por reivindicaciones concretas no ha de limitarse a firma de acuerdos incumplidos hasta la saciedad por los distintos gobiernos, principalmente nacionales y departamentales. Surge entonces la necesidad de comprender que la realización plena de la reivindicaciones es esencialmente un problema político; que es importante avanzar en negociaciones concretas, pero que el cumplimiento efectivo de acuerdos se dará cuando exista una forma diferente de construir y desarrollar la política en el país, con un Estado realmente preocupado por los intereses de los eternamente excluidos del ejercicio del poder, de los hombres y mujeres del común.

## 2. El momento de la lucha social y popular y algunos retos de la izquierda

Sendos análisis ha aportado la academia en torno a la crisis de los movimientos sociales en las últimas dos décadas. Sin embargo, durante este mismo periodo el país ha asistido a un lento y complejo proceso de recomposición de algunos movimientos sociales que son protagonistas del proceso de resistencia contemporáneo. Dos de los más importantes son el movimiento campesino y el estudiantil, los cuales, desde diversas tradiciones de movilización, han afrontado un proceso de fortalecimiento organizativo, aún inacabado, que parte desde lo regional y -particularmente en el caso estudiantil- ha convergido en articulaciones de orden nacional, tanto por la construcción de referentes organizativos como por coordinaciones entre diversas expresiones organizativas.

Los programas de cada una de las organizaciones son aportes que deben desarrollarse; hasta el momento, ningún programa recoge al conjunto de la izquierda y, lo que es más preocupante aún, al conjunto del pueblo colombiano, por lo que no se puede pretender ser la totalidad. Hay diferencias porque existen concepciones distintas, y bien es sabido que en la construcción democrática el debate entre propuestas es el que permite enriquecer lo colectivo.

De acuerdo con la información contenida en la Base de Datos de Luchas Sociales del CINEP, el número total de acciones de protesta por año se duplicó entre 2002 y 2010, presentándose el pico más importante en 2007. Durante ese año se realizaron varios paros estudiantiles en universidades públicas, en tanto que en agosto tuvo lugar la Movilización Nacional Agraria y Popular, cuyos epicentros estuvieron en los departamentos del Cauca y el Tolima. En el caso del movimiento campesino, posterior a un ascenso de las luchas regionales desde mediados de los años noventa en el Suroccidente, el Magdalena Medio y el Oriente colombianos, se generaron diversos espacios de convergencia como el Congreso Nacional Agrario de 2003, el Encuentro Nacional de Comunidades Campesinas, Afrodescendientes e Indígenas por la Tierra y la Paz de Colombia en la ciudad de Barrancabermeja y el Congreso de Tierras y Territorios, desarrollado en Cali, ambos durante el 2011.

El movimiento estudiantil ha vivido un proceso de recomposición organizativa que lo ha llevado de una menguada presencia con acciones de protesta vinculadas preferentemente a los grandes debates de política nacional -como los diálogos de paz y los planes de desarrollo durante la segunda mitad de los noventa- al fortalecimiento organizativo, la creación de nuevas expresiones de corte nacional, la lucha por reivindicaciones específicas del estudiantado y la recuperación de los paros académicos como parte de los repertorios de acción colectiva, a lo largo de la primera década de dos mil. La reciente victoria del movimiento estudiantil, al colocarle freno a la reforma de la ley 30, muestra avances cualitativos y cuantitativos en este movimiento social, cristalizados en la creación de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, la construcción del Programa Mínimo de los Estudiantes -asumido como referente nacional- y en el desarrollo de nuevos repertorios de movilización, ampliamente reconocidos por su creatividad. El reto está ahora en traducir la capacidad de resistencia en una propuesta concreta de ley y en la construcción de nuevos horizontes de lucha.

Otros sectores que han logrado desarrollar procesos de movilización son el de desplazados y víctimas de la violencia estatal, el movimiento LGTBI, los movimientos por la paz y la solución política al conflicto, algunos procesos del movimiento de los trabajadores, particularmente los vinculados al sector minero energético y al de la cañicultura, así como pequeños y medianos mineros. Lo anterior teniendo como telón de fondo la crisis estructural del movimiento sindical el cual, con posterioridad al Gran Paro Nacional de 1998, ha perdido capacidad de conducción y protagonismo en el conjunto de la movilización social.

Este panorama de ascenso en la lucha y movilización social ha propuesto nuevos retos a la izquierda colombiana, ya que es evidente la emergencia de un

profundo descontento social de manera tanto organizada como espontanea, pese a las contenciones desde los aparatos represivos del Estado y la manipulación de los grandes medios de información. Marcha Patriótica es uno de los resultados de este proceso de ascenso, evidencia del agotamiento de las comunidades y procesos de base frente a la inoperancia del Estado y los sucesivos gobiernos, buscando realizar espacios de participación real para la edificación de nuevas realidades en el país; la coherencia y el reto están en escuchar efectivamente las propuestas y reivindicaciones de estos sectores movilizados, invisibilizados y que no han tenido espacios de participación efectiva.

En cuanto a los retos, puede decirse que la izquierda tiene la tarea de una lectura efectiva de los temas y espacios de descontento social, para contribuir a generar alternativas y fortalecer los procesos en torno a las mismas. Las agendas propuestas por diferentes sectores dejan en claro algunos temas fundamentales en el momento actual. Bajo la política de restitución de tierras del Gobierno, adquiere relevancia absoluta la discusión sobre reforma agraria y territorio, resaltada en los dos eventos desarrollados en 2011 por el Congreso de los Pueblos y la Marcha Patriótica. Así mismo, adquiere total trascendencia el tema de la minería y los recursos energéticos, lucha en la que han participado sectores como el MOIR, la Marcha Patriótica y gran variedad de expresiones regionales, como ASOQUIMBO. La política educativa y la lucha de la MANE sigue siendo un tema central, así como los Tratados de Libre Comercio, que han sido punto permanente de resistencia en todas las organizaciones del campo popular. La lucha por la paz, la justicia y la reparación ha recuperado espacio entre los temas de movilización popular, promovida por organizaciones como Colombianos y Colombianas por la Paz, Marcha Patriótica, el MOVICE, las organizaciones de desplazados y de prisioneras y prisioneros políticos. Otros, como salud, movilidad urbana y condiciones laborales y de trabajo, siguen esperando a ser plenamente identificados para la construcción de propuestas de organización.

Pero no sólo es necesario que la izquierda haga lecturas acertadas sobre los temas de las resistencias, también es imperativo construir dinámicas de trabajo que eviten caer en la instrumentalización de las luchas populares, lo cual se garantiza comprendiendo que las organizaciones de la izquierda no llegan de modo repentino a conducir procesos ya en marcha, sino que son sujetos que promueven la movilización y organización permanente y desde la base.

Un reto fundamental es la unidad y articulación efectiva de las distintas expresiones del campo popular. En la última década se generaron diferentes propuestas unitarias, permitiendo coordinación entre sectores y organizaciones, que, sin embargo, también han sido objeto de críticas. Una experiencia a resaltar es la Gran Coalición Democrática,

que encabezó la lucha contra el Referendo de Uribe en el año 2003, derrotando la implementación de sendas reformas constitucionales lesivas de los derechos sociales. Esta experiencia demostró la necesidad y efectividad del trabajo unitario en el desarrollo de la lucha social alrededor de temas claves, con una estrategia conjunta y definida de acción, desarrollando planes y tareas concretas. Lamentablemente y con posterioridad, la Gran Coalición no logró volver a ser espacio de amplia convergencia al perder la dinámica de trabajo conjunto, en tanto cada sector privilegió la exposición de su propia agenda de movilización, sin avanzar en lo realmente unitario. En la actualidad, quienes convergemos en la Coordinación Nacional de Organizaciones y Movimientos Sociales y Políticos tenemos la responsabilidad de lograr la realización de la unidad, mediante acciones conjuntas y banderas de lucha que logren recoger al grueso de colombianas y colombianos inconformes con el estado actual de cosas.

Otro punto álgido de la unidad es la construcción programática. Los programas de cada una de las organizaciones son aportes que deben desarrollarse; hasta el momento, ningún programa recoge al conjunto de la izquierda y, lo que es más preocupante aún, al conjunto del pueblo colombiano, por lo que no se puede pretender ser la totalidad. Hay diferencias porque existen concepciones distintas, y bien es sabido que en la construcción democrática el debate entre propuestas es el que permite enriquecer lo colectivo. Pero existen, como ya se había mencionado, grandes temas de unidad, como la lucha contra los TLC y la gran minería, y por educación, trabajo digno, salud, soberanía y paz, tierras y territorios, que surgen de las luchas sociales a nivel nacional. El reto es, por tanto, construir desde los aportes de cada organización y sector propuestas programáticas y de plataforma que sirvan para desarrollar las luchas del corto y mediano plazo, tal y como ha quedado evidenciado con el caso de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil.

Tanto el surgimiento de nuevas propuestas organizativas como el fortalecimiento de los proyectos del campo democrático y revolucionario constituyen un aporte fundamental para el avance de la lucha por la transformación. Las propuestas del campo popular tienen profundos elementos en común, como la búsqueda de alternativas al actual estado de cosas, y, por lo tanto, no puede entenderse que al surgir nuevos procesos organizativos se está configurando un antagonismo con los previamente existentes. Todo lo que sume y multiplique en el desarrollo de la lucha social debe ser congratulado y no señalado bajo falsos debates o utilizado como excusa para evadir los debates internos de cada organización.

La Marcha Patriótica ha surgido para oponerse al gran capital trasnacional y la oligarquía imperante en nuestro país, para aportar con propuestas y alternativas, buscando forjar la más amplia unidad con las diversas organizaciones hermanas y

amigas que buscamos las transformaciones que requiere la nación. Los debates esenciales que el momento histórico exige a las organizaciones democráticas y revolucionarias deben ir encaminados a forjar propuestas de movilización y programáticas para recoger el amplio sentimiento de descontento por las consecuencias nocivas del modelo económico, hacia la construcción de democracia y por la búsqueda de la paz con justicia social. Es aquí donde radica el punto central de discusión.

## 3. ¿Qué tan pertinente es la búsqueda de la paz como escenario de lucha social y popular?

La lucha por la democracia es, desde la perspectiva de Marcha Patriótica, total y absolutamente coherente con la búsqueda de la solución política del conflicto social, político, económico y armado que se vive en el país; no son esferas diferentes de la realidad colombiana, sino un mismo proceso de reconstrucción del país y de la dignidad de sus habitantes.

Una de las más evidentes -y también profundamente dolorosas expresiones del conflicto colombiano- la constituyen los hechos relacionados con el enfrentamiento armado, siendo cardinal allanar caminos hacia el fin del sacrificio de miles de colombianos y colombianas. De la mano con lo anterior, resulta fundamental resaltar que se trata de una manifestación del conflicto y no de sus más profundas causas, lo que no reduce su trascendencia. Flaco favor se le hace al país buscando solucionar la expresión del fenómeno y no los orígenes del mismo, como ha pretendido la "política de paz" de los diferentes gobiernos, particularmente la de los últimos tres. Colocar nuevamente sobre la mesa este tema, discutido ampliamente y a lo largo de varias décadas en organizaciones y regiones que padecen la guerra, no significa retroceder en los debates de la izquierda sino volver el rostro a las necesidades más sentidas en nuestro país, desde las cuales se construyen las propuestas de los sectores progresistas.

La Marcha Patriótica ha surgido para oponerse al gran capital trasnacional y la oligarquía imperante en nuestro país, para aportar con propuestas y alternativas, buscando forjar la más amplia unidad con las diversas organizaciones hermanas y amigas que buscamos las transformaciones que requiere la nación.

Negar la relación entre enfrentamientos armados y precarias condiciones sociales, económicas, culturales, ambientales y políticas en el país, es negar razones esenciales como los vastos procesos de reconversión productiva y desplazamiento masivo a los que han sido sometidas regiones como el Chocó, Urabá, Tolima y el Magdalena Medio, entre otras. Como lo han evidenciado múltiples investigaciones académicas, detrás de la dinámica del conflicto armado y de la violencia existen lógicas relativas al uso de recursos, de tierras y territorios, así como la aniquilación de diferentes expresiones de oposición política al establecimiento, tanto regionales como departamentales. De lo anterior deriva que significaría también negar la posibilidad de una solución real y con profundidad del escenario de muerte que campea en Colombia, lo cual ha quedado demostrado por el fracaso del "proceso de paz" con los máximos jefes paramilitares.

De igual manera, la solución política exige la más amplia participación de los diferentes sectores sociales, populares y políticos realmente comprometidos con la paz, para que desde sus propuestas se generen espacios de participación desde la base en la consecución de soluciones. Resolver los problemas de tierras, educación, salud, ambiente, planificación y desarrollo territorial, de reconocimiento de la diversidad y demás, exige del concurso de todas y todos los interesados; aquí radica la potencia transformadora de las organizaciones y procesos populares, que ha de convertirse en germen de nuevas formas de poder y permitirá, también, el avance real en la solución del conflicto que vive el país.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS


» **Borón, Atilio.** "Poder, "contra-poder" y "antipoder." Notas sobre un extravío teórico político en el pensamiento crítico contemporáneo". En: *Chiapas*, Buenos Aires/México, Nº 15, Agosto de 2003, p. 10.

» **Cohen Jean y Arato Andrew.** *Sociedad Civil y Teoría Política*, Fondo de Cultura Económica, 2001.

» **García Juan Ignacio.** "Regulación Jurídica de los Partidos Políticos en Chile". En: *Regulación jurídica de los partidos políticos en América Latina*, Zovatto G., Daniel (Coordinador). Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2006.

» **De Zubiría Samper Sergio.** *Carácter, Alcances y Plataforma Política*, (borrador, mímeo), 2012.

Fotografía: El Turbión

Fotografía: Javier Guáqueta